

AMBICIÓN POLÍTICA SIN ÁRBITRO

Guerra sucia fractura coaliciones internas

LA CARENCIA DE NORMATIVA ELECTORAL VIGENTE permite el uso de estrategias de presión mediática para obtener las 17 gubernaturas en juego

POR HÉCTOR FIGUEROA

hfa@gimm.com.mx

Las campañas anticipadas rumbo a 2027 han dejado de ser simples ejercicios de posicionamiento para convertirse en una fuente constante de inestabilidad. La falta de lineamientos claros del INE que regulen estos actos ha desatado una lucha interna entre los aspirantes de todos los partidos, rompiendo la paz en los procesos internos y fracturando la viabilidad de las coaliciones electorales en juego.

El conflicto emana de un preocupante vacío de autoridad: mientras el INE se deslinda al delegar la facultad de reglamentar la designación de “coordinadores territoriales” —quienes serán, de facto, los futuros candidatos a gobernadores— a los organismos electorales locales, estos tampoco han emitido normativas que ordenen el panorama actual. En la última sesión del INE, la consejera Carla Humphrey fue tajante ante la incertidumbre: “Nosotros sólo somos responsables de la campaña federal; las autoridades locales deben verlo, hay 17 gubernaturas en juego”.

Ante esta omisión, los liderazgos de Morena, PVEM, PT y la oposición han recurrido a estrategias de presión y guerra sucia. En Morena, la Base Octava de la convocatoria para las coordinaciones estatales —que prohíbe el desprestigio— es ignorada sistemáticamente. En Chihuahua, la senadora

RADIOGRAFÍA DEL CAOS ELECTORAL 2027



Vacío legal. El INE delega reglas a estados, pero nadie regula las precampañas.



Fuego amigo. Monreal pide frenar descalificaciones internas en Morena.



Alianzas rotas. Morena y PVEM chocan por candidaturas en Chihuahua y SLP.



Guerra Sucia. Reactivan campañas de desprestigio en NL (caso NXIVM).



Cotos a independientes. Reformas en Michoacán buscan frenar candidaturas ciudadanas.



Bardas “sin ley”. Propaganda anticipada en Guanajuato, sin regulación de partidos.



Golpe político. Detención de Ruffo Appel denunciada como persecución en BC.

con licencia Andrea Chávez ha emprendido una ofensiva contra Cruz Pérez Cuéllar, cuestionando su pasado panista y su afinidad con el PVEM. Esta pugna ha fracturado la alianza local: el PVEM condiciona su respaldo a Pérez Cuéllar, mientras el PT exige evitar vetos. En Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales vuelve a enfrentar una campaña en redes que la vincula con la secta NXIVM.

La crisis de alianzas se replica en otras entidades. En Michoacán, el PT rechaza a Carlos Torres Piña en favor de Raúl Morón. En Quintana

Roo, el PT nombró a Rafael Marín Mollinedo coordinador de afiliación, mientras el PVEM apuesta por Gino Segura Vázquez. Ante esto, Ricardo Monreal ha llamado a frenar el “fuego amigo”, advirtiendo que la guerra sucia beneficia a la oposición.

La situación es crítica en San Luis Potosí, donde la alianza Morena-PT-PVEM se rompió ante el registro independiente de Ruth Miriam González, esposa de Ricardo Gallardo. Asimismo, la imposición del empresario Gerardo Sánchez Zuma ya mediante el PT, pese al

rechazo de Morena, ha profundizado la división. En Guerrero, la precampaña ha tomado forma propia, con Félix Salgado Macedonio siendo aclamado como “gobernador” en eventos, pese a sus declaraciones sobre no buscar la candidatura.

La oposición también enfrenta turbulencias. En Michoacán, una reforma de Morena para limitar candidaturas independientes ha obligado a Grecia Quiroz, lidereza del Movimiento del Sombrero, a acudir a la Suprema Corte mediante un *amicus curiae*. En el PAN, el descontento se centra en la opacidad de los métodos de selección. En Guanajuato, Eduardo López Mares denunció que el mecanismo para elegir a los “Defensores de la Patria, la Familia y la Libertad” carece de sustento estatutario, mientras proliferan pintas de propaganda sin regulación alguna.

Finalmente, el tablero se cimbó con el caso de Ernesto Ruffo Appel. Tras integrarse al Consejo Consultivo del nuevo partido Somos México, su detención por tráfico de hidrocarburos truncó su regreso. Guadalupe Acosta Naranjo, líder de dicha fuerza, denunció que la aprehensión es una maniobra de persecución para frenar el crecimiento del partido frente a la contienda de 2027.

La falta de un árbitro que

ponga orden ha transformado la antesala de 2027 en un terreno donde prevalecen las ambiciones personales sobre la civilidad, dejando el proceso electoral bajo una sombra de incertidumbre jurídica.

La disputa ha superado las normas internas, convirtiéndose en el epicentro de una confrontación que amenaza con dejar fuera de juego a quienes no se alineen a las estrategias agresivas de control.

La ausencia de reglas claras ha dejado la contienda en un caos donde cada partido impone su propia lógica, rompiendo los diques de la política tradicional y abriendo una puerta peligrosa al autoritarismo en la selección de quienes buscarán gobernar el destino del país durante los próximos años. Ante este panorama de gran fragmentación, la clase política mexicana parece estar atrapada en un laberinto de intereses particulares que inhibe la construcción de consensos.

La urgente necesidad de normar los procesos internos es, hoy, la única vía para evitar que el desorden actual socave la confianza ciudadana. Es momento de que las dirigencias asuman un compromiso real con la legalidad, pues la estabilidad de nuestra República depende de que las contiendas se definan mediante el debate y no por la guerra fratricida que define a los partidos.



Foto: Cuartoscuro/Archivo

Las campañas anticipadas para el 2027 y la falta de lineamientos del INE que las regulen, han desatado una lucha interna entre candidatos.